



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. limitada
31 de agosto de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierto sobre recuperación de activos

Sexta Reunión

Viena, 30 y 31 de agosto de 2012

Proyecto de informe

Adición

V. Debate temático sobre la cooperación en materia de decomiso: artículo 54 (Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso) y artículo 55 (Cooperación internacional para fines de decomiso)

1. Panelistas de los Estados Unidos de América presentaron su marco jurídico referente a las disposiciones de la Convención aplicables al decomiso, así como las experiencias adquiridas y las dificultades halladas en ese ámbito. Sus conclusiones se basaron en cuatro casos muy notorios de recuperación de activos relacionados con la corrupción, en los que se había solicitado la recuperación de los activos a los Estados Unidos. El cauce general era la ejecución de sentencias extranjeras. Sin embargo, no resultaba eficaz si no podía obtenerse una sentencia firme en el país requirente o si no tenía por objeto bienes ubicados en el extranjero. Una alternativa era entablar procedimientos penales en los Estados Unidos, pero presentaba dificultades cuando el acusado no se encontraba en territorio nacional o cuando los Estados Unidos no tenían jurisdicción. Se comunicaron experiencias positivas en el uso del decomiso sin que medie una condena. Los Estados Unidos podían adoptar medidas de retención y mantener activos retenidos durante 30 días. En base a la experiencia resultante de las dificultades surgidas en los casos de recuperación de activos, se había enmendado la ley para permitir la ejecución de órdenes de incautación o embargo preventivo de otros países sin que fuera necesaria una sentencia judicial en el país requirente. Los panelistas presentaron también un caso en que los Estados Unidos entablaron una acción respecto a activos ubicados en Singapur vinculados a un caso de corrupción en Bangladesh; el vínculo con la jurisdicción estadounidense estaba en que los fondos se habían transferido a través



de un banco ubicado en los Estados Unidos. Se destacó que, según la legislación estadounidense, el plazo de prescripción se suspendía cuando los activos no se encontraban en los Estados Unidos.

2. Los panelistas subrayaron también que, en estos casos, los Estados Unidos dependían en gran medida de la información que les proporcionara el país requirente. En algunas ocasiones la conducta delictiva se había legitimado en el país requirente debido a la influencia de cargos corruptos, o estos habían sido absueltos. Los investigadores o los fiscales no habían querido proporcionar pruebas por miedo a represalias, o había sido difícil evaluar las pruebas, sobre todo cuando se había producido un cambio de régimen tras un largo período de tiempo. Además, cuando el cargo había estado en el poder durante muchos años, era difícil determinar con certeza el origen lícito o ilícito de los activos. Las restricciones de tipo económico a la capacidad de investigación del país requirente también podían dificultar el establecimiento de un vínculo entre la conducta corrupta y los activos. La doble incriminación se consideraba un obstáculo, en particular respecto a los delitos de declaración de situación financiera falsa, mala conducta y enriquecimiento ilícito, que no eran delitos respecto de los que pudiera ordenarse un decomiso en los Estados Unidos. Además, la preocupación por el respeto de las garantías procesales en el país solicitante podía socavar la ejecución de sentencias extranjeras.

3. El panelista de Francia comunicó que el sistema jurídico francés se basaba en la condena penal, y el decomiso se consideraba una sanción accesoria. No obstante, se podía llevar a cabo un decomiso sobre la base de una solicitud de asistencia judicial recíproca, según fallo del Tribunal de Casación en 2003, que se confirmó en 2009. Se podía ejecutar una solicitud de decomiso civil en Francia siempre que se cumpliera una de las dos condiciones siguientes: o bien el fallo en que se basaba la solicitud de decomiso era firme, vinculante y su ejecución no contraviniera el orden público; o bien el producto del delito se podría haber decomisado en un procedimiento similar desarrollado según el derecho francés.

4. En el derecho francés el decomiso se podía dividir en tres partes principales: en primer lugar, la identificación del producto del delito, tarea realizada por estructuras multidisciplinarias como grupos especiales de intervención regionales de la policía y diversas entidades administrativas; en segundo lugar, la incautación, comenzando por la apertura de expedientes especiales en la etapa de investigación, como medida preparatoria necesaria para el decomiso; y en tercer lugar, el decomiso mismo, que era muy amplio ya que esa sanción se podía aplicar a cualquier delito penado con más de un año de prisión y podía abarcar cualquier activo perteneciente a la persona en cuestión, así como cualquier activo que tuviera a su disposición, aunque no fuera su legítima propietaria. Tras una innovación legislativa reciente, también era posible decomisar un valor equivalente al de los activos.

5. En 2010 Francia había creado un organismo especializado para administrar los activos incautados y decomisados (AGRASC, Agencia de Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Decomisados) que desde entonces había tramitado 10.000 casos con un valor de 400 millones de euros en bienes decomisados.

6. En la práctica las solicitudes de asistencia judicial recíproca las recibía el Ministerio de Justicia, como autoridad central, y las remitía por conducto de la Oficina del Ministerio Público de París. Se habían planteado problemas relativos

al tiempo necesario para la traducción, que podría llevar hasta varios meses a causa de la complejidad de las solicitudes y la información que contenían. La necesidad de buscar información adicional para identificar a las personas involucradas y rastrear los activos también originaba demoras y, mientras tanto, los activos eran desplazados. Para superar este problema el Ministerio de Justicia había tratado de mejorar la comunicación oficiosa y el seguimiento periódico con las diferentes autoridades que intervenían. También se enviaba a los Estados requirentes una confirmación automática del recibo de la solicitud. Se organizaban para las autoridades extranjeras seminarios sobre el decomiso de activos, así como actividades de capacitación para los especialistas franceses. Como ilustración del proceso, el panelista citó un caso reciente cuyo resultado fue el decomiso de activos fundado en el delito de blanqueo de dinero. En lo que respecta a plazos de prescripción, el orador señaló que para los delitos de corrupción se preveía un plazo de prescripción de tres años, por término medio, pero que el Tribunal de Casación había interpretado que el punto de partida de la prescripción era el día en que podían comenzar razonablemente las actuaciones públicas contra el delito, es decir cuando se habían descubierto sus elementos constitutivos. Este problema también lo atenuaba el hecho de que la ocultación era a menudo motivo de acusación, que, por tratarse de un delito continuado, no estaba sujeta a plazo de prescripción.

7. El panelista de Indonesia puso de relieve una serie de dificultades relativas a la recuperación de activos. Destacó en particular el carácter transnacional de la corrupción y las diferencias entre los sistemas jurídicos. En vista de las dificultades que se planteaban, Indonesia había adoptado un enfoque más activo creando el Grupo de acción para la recuperación de activos. Existían otros planes que incluían la creación de una oficina de recuperación de activos dotada de más funciones y atribuciones. Fundándose en la experiencia de su país en lo que respecta a los diversos organismos que participaban en el proceso de recuperación de activos, el orador destacó la utilidad de la coordinación interinstitucional. Indonesia aplicaba las medidas previstas en los artículos 54 y 55 sobre cooperación internacional para la recuperación de activos. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca podían remitirse directamente a la autoridad central (Fiscalía General) o por comunicación directa entre las autoridades encargadas de las actuaciones penales. Indonesia facilitaba asistencia judicial recíproca sobre la base del principio de reciprocidad.

8. El representante del Brasil dio cuenta de las experiencias de la Fiscalía General Nacional. Destacó que el cauce habitual para la recuperación de activos adoptado por la Fiscalía era el del procedimiento civil. En el seno de esa institución se habían creado tres grupos especializados: el Grupo de Asuntos Internacionales, encargado de entablar pleitos en el extranjero así como de ejecutar las solicitudes de asistencia recibidas por el Brasil; el Grupo de Lucha Proactiva contra la Corrupción, que se ocupa principalmente de la recuperación de activos dimanantes de fondos públicos, y el Grupo de Recuperación de Activos de Grandes Deudores, centrado en situaciones en las que resultaban afectadas autoridades federales y fundaciones públicas. Presentó ejemplos de recuperación satisfactoria de activos provenientes de diversos sistemas jurídicos y recibidos por el Brasil. El panelista expuso también algunas experiencias recientes satisfactorias en cuanto al rastreo y embargo preventivo de fondos en conformidad con las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora bien, en este último caso, la orden de embargo había sido levantada tras ser eliminada la institución de la lista de entidades sujetas a dicha medida con arreglo a las citadas resoluciones. El orador

mencionó como principal problema en los procedimientos de recuperación de activos las demoras existentes en los procedimientos penales brasileños. El Brasil tenía más de 2.000 millones de dólares de los Estados Unidos sujetos a embargo preventivo en otros Estados, que no podían devolverse aún a causa de la inexistencia de decisiones judiciales firmes en el país sobre dichos casos.

9. En el debate celebrado a continuación se reconoció la tendencia creciente hacia el decomiso sin que mediara condena en una serie de países. Algunos oradores destacaron las positivas experiencias resultantes del decomiso sin mediar condena, especialmente en los casos de delincuencia organizada y gran corrupción. Un orador comunicó que la ejecutabilidad de órdenes judiciales extranjeras de decomiso sin que mediara condena se había hecho extensible recientemente a todas las jurisdicciones extranjeras. Otros expusieron las inquietudes de sus países en cuanto a la legislación sobre el decomiso sin mediar condena, que se basaban en el derecho de propiedad y la presunción de inocencia. Se mencionaron las negociaciones en curso, en el marco de la Unión Europea, sobre el tema del decomiso. Si bien el Tribunal de Justicia Europeo había estimado en un fallo reciente que el decomiso sin mediar condena no constituía una violación del derecho de propiedad ni de la presunción de inocencia, aún no se había logrado acuerdo sobre una directiva general para la UE porque las opiniones discrepaban considerablemente.

10. Se puso de relieve la importancia de la revelación espontánea de información sobre los activos por parte de los Estados en que estuvieran ubicados. Se recomendó que las medidas para reforzar la confianza y lealtad entre los Estados requirentes y los requeridos se mejorasen para facilitar la revelación espontánea. Algunos oradores destacaron la necesidad de un mayor intercambio y coordinación de la información, en lo que respectaba tanto a la información sobre los activos como sobre los procedimientos y sistemas jurídicos. Asimismo, varios oradores dieron cuenta de sus experiencias y subrayaron los obstáculos procesales con que se enfrentaban en sus países, cuyo resultado era la larga duración de los procedimientos, primero para el decomiso y después para la devolución de los activos.